Legislación y juventud en México

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL SUJETO JUVENIL EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

MOISÉS DOMÍNGUEZ PÉREZ

Cae la noche sobre Teotihuacán.
En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana,
Suenan guitarras roncas,
¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida,
donde desenterrar la palabra,
la proporción que rige el himno y al discurso,
al baile, a la ciudad y a la balanza?
El canto mexicano estalla en un carajo,
estrella de colores que se apaga,
piedra que nos cierra las puertas del contacto,
sabe la tierra a tierra envejecida.
Octavio Paz, Hinojo entre ruinas, 1957

Resumen

Este es un trabajo sobre cómo ven los jóvenes a las leyes y también sobre cómo ven las leyes a los jóvenes, en particular cómo se les considera desde nuestra Ley Suprema. Considero que, para entender la relación central que analizaremos en este ensayo, es necesario abordar de manera panorámica la peculiar mirada que las generaciones de jóvenes han tenido sobre las leyes. Como se verá, parte de la hipótesis de que la postura restrictiva hacia los derechos y la autodeterminación de los jóvenes que encarna la Constitución, se debe, en buena medida, a esos desencuentros, ignorancias, desconfianzas y misticaciones a los que hacemos alusión.

Abstract

This article deals with the way youngsters consider laws and vice versa, mainly with how youngsters are considered by the Constitution. In my own point of view it is imperative that there be a deep analysis regarding what young people think about laws through generations so as to understand the aim of this essay. As you can see further, I start from the hypothesis that the restrictive position towards youngsters’ rights and their self-determination that embodies our Constitution is to a great extent due to disagreement, ignorance, distrust and mystification to which we make reference.
INTRODUCCIÓN

Mi interés por abordar la idea de juventud que existe en las leyes mexicanas, y de entre ellas, de manera destacada, la Constitución mexicana, nace por la vinculación de dos ámbitos de mi reflexión y trabajo profesional que, de unos años hasta la fecha, he llevado a cabo, esto es, los derechos de la juventud, las políticas y las leyes que los comprenden. A partir de mi experiencia y análisis sobre este grupo etario y de mi oficio de asesor parlamentario, he podido darme cuenta que la relación social, sociológica, legal, jurídica y legislativa entre la juventud y las leyes, es un terreno pantanos, lleno de desencuentros, ignorancias, desconfianzas y misticificaciones mutuas.

A pesar de la negación de la vigencia de la ley por parte de la juventud y de que el marco legal pretende responder a la realidad juvenil, día tras día, ellos conviven rudamente con normas en las que no se reconocen ni encuentran ventajas. Cuando los jóvenes van al cine buscando entrar a la película de su gusto, y hallan restricciones de acceso basadas en criterios ajenos a sus intereses, además de poco transparentes, vemos cómo la ley se mantiene alejada de sus expectativas.

Cuando a una adolescente, se le permite ejercer su sexualidad, con la advertencia de que lo haga responsable (consideración erróneamente enmarcada en la distante planificación familiar), pero, por otra parte, se le niega la información para ello; y a quien se le otorgue, aún con fines preventivos o educativos, pero sin autorización de la autoridad competente, se le puede considerar como corruptor de menores.\(^1\) Estamos frente a una situación donde la ley, no sólo no satisface sus necesidades, sino que, incluso, la confronta con ella.

Pero hay situaciones más trascendentales para la vida de un joven, como la obligatoriedad del servicio militar, la siempre polémica definición de la edad penal y el ejercicio de los derechos políticos, que a través de las leyes fueron determinadas, en buena medida, por la sociedad adulta, casi siempre a contracorriente de las opiniones de los propios jóvenes.

Desde una perspectiva antropológica, Carles Feixa establece que,

\[...\] la juventud aparece como una construcción cultural relativa en el tiempo y en el espacio. Esto es: cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y contenidos de esta transición son muy variables. Aunque este proceso tiene una base biológica (el proceso de maduración sexual y desarrollo corporal), lo importante es la percepción social de estos cambios y sus repercusiones para la comunidad: no en todos los sitios significa lo mismo que a las muchachas les crezcan los pechos y a los muchachos el bigote.\(^2\)

Ante esta visión teórica, resulta interesante preguntar ¿cuál es la construcción cultural del sujeto juvenil que permea la Constitución mexicana?, pero más concretamente, ¿cómo está organizada y regulada la transición de la infancia a la vida adulta en México a través de sus leyes, y de

\(^1\) Artículo 201 del Código Penal Federal.
manera específica en la Constitución? ¿Cómo se entiende en la ley ese periodo de transición que denominamos genéricamente juventud?

Desde luego, la elaboración de las complejas respuestas que se derivan de tales preguntas es una de mis pretensiones futuras, las cuales, sin embargo, trascienden el marco de este trabajo. En ese sentido, el alcance de este ensayo es el de plantear amarres en los puntos de cruce (político, social, teórico) de las dos dimensiones analíticas que denominamos legislación y juventud, tomando como intención central responder a una pregunta más básica ¿cuál es la visión de la juventud, a partir de las consideraciones de edad, que atraviesa los artículos 31, 34, 55, 58 y 82 de la Carta constitucional mexicana, que resultan clave para una parte importante de la legislación que se relaciona con ese grupo etario?

Éste es un trabajo sobre cómo ven los jóvenes a las leyes y también sobre cómo ven las leyes a los jóvenes, en particular cómo se les considera desde nuestra Ley Suprema. Considero que, para entender la relación central que analizaremos en este ensayo, es necesario abordar de manera panorámica la peculiar mirada que las generaciones de jóvenes han tenido sobre las leyes. Como se verá, parte de la hipótesis de que la postura restrictiva hacia los derechos y la autodeterminación de los jóvenes que encarna la Constitución, se debe, en buena medida, a esos desencuentros, ignorancias, desconfianzas y mitificaciones a los que hacemos alusión.

Una última aclaración. Este trabajo es mi primer intento por romper las cercas del campo de la sociología política para permitirle anegarse en las aguas del derecho. En contrasentido, pero no en contra, sino en concordancia con iniciativas que buscan enriquecer los campos del derecho, este ensayo coincide con la visión del especialista en derecho constitucional Miguel Carbonell, cuando afirma que tener idea de lo que realmente sucede en México, “no solamente tiene que ver con la necesidad de trabajar con metodologías mixtas en el campo del derecho constitucional —que a veces tiene que moverse a caballo entre la ciencia política, la teoría del derecho y la sociología—, sino también y sobre todo para no dejar libre el campo de la realidad a los políticos”.  

I. LOS JÓVENES FRENTE A LAS LEYES

El concepto de cultura política nos puede resultar útil para entender la particular postura de los jóvenes frente a las leyes en México. Ésta puede ser entendida como la relación o el vínculo que se establece entre los individuos y las estructuras

---

políticas a través de los grupos sociales y las instituciones, al conectar la tendencias individuales con las características del sistema.⁴

Visto desde un esquema teórico social bipolar, considerando que la sociedad se mueve bajo el continuo estabilidad-cambio, donde en la primera, predominan elementos de una cultura política conservadora-autoritaria; y en la segunda, una de corte democrático, desde una perspectiva amplia, la cultura política democrática implicaría lo siguiente:

[... ] la disposición de los miembros de una comunidad política para regir sus comportamientos dentro de los valores tendentes a fomentar una política civilizada en el despliegue de actitudes positivas del poder, las normas vigentes y la autoridad. Implicaría, también, una congruencia entre lo que se conforma institucionalmente para el apoyo de las actividades públicas y lo que se concibe culturalmente como tareas de políticas.⁵

En este sentido, el reconocimiento de las normas vigentes como un marco democrático que regula legitimamente la convivencia entre los jóvenes y entre éstos y los otros grupos sociales y las instituciones, todas definidas en el derecho, nunca se dio en el México de la era posrevolucionaria. Por el contrario, el “sistema de derechos positivos otorgados por la democracia, que en la letra garantizaban las condiciones requeridas para su ejercicio, aparecieron, en el caso mexicano, como una ficción manipulada por los tutores del proyecto autoritario”.⁶

Esta visión global de la cultura política, en términos de los segmentos juveniles, cobró una expresión particular. A lo largo de varias décadas, sucesivas generaciones y grupos juveniles diversos, en lo general, no consideraron a las leyes mexicanas como un marco de garantías y de derechos, y aun grupos más afines a ideologías antisistema, lo vieron y vivieron como un orden legal de opresión.⁷ La visión de que “las leyes fueron hechas para ser violadas” fue parte de la cultura política que cada generación heredó a la sucesiva, razón por la cual, para algunos sectores de los jóvenes, desconocer la ley no sólo fue un acto voluntario de ignorancia, sino de rebeldía.

---

⁴ idem, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Ciudadanos y cultura de la democracia en México. Reglas, instituciones y valores de la democracia, México, 2000, mimeo, p. 2.
⁵ idem, p. 3.
⁶ Idem, p. 7.
⁷ Esas ideologías pueden ser tanto de derecha como de izquierda, cristeros, anarquistas o guerrilleros, consideraban al régimen político legal, heredado de la región mexicana como un sistema ilegítimo.
En el caso de sectores de jóvenes integrados, o simplemente no antisistema, la ley no fue un desafío, pero tampoco significó un aliado. Las formas de torcerla, negociarla, o peor aún, de evitarla, era la forma de socialización clásica respecto del Estado de Derecho.

Esta situación se veía reforzada por distintas ideologías e identidades juveniles frente a lo público, como es el caso particular de los jóvenes portadores de ideologías políticas de izquierda, donde el predominio de una ideología marxista ortodoxa los hacía descalificar, desde la teoría hasta la práctica, el marco legal del sistema social, era considerado un “instrumento de dominación burgués”.

En abono a ese desencuentro entre la ley y los jóvenes, el movimiento juvenil más importante de nuestra historia contemporánea, que fue justamente el llamado movimiento del “68”, al ser reprimido violentamente, por enarbolar un reclamo democrático sintetizado en el cumplimiento estricto de la Constitución, cerró de tajo, para toda una generación, la puerta de la legalidad.

No obstante ese peso abrumador de la cultura política mexicana, la fuerza del cambio social y político de las nuevas generaciones ha permitido reducir esa desconfianza del marco legal, aunque aún no lo suficiente.

Hoy en día, el grueso de los jóvenes coincide con los sectores sociales que otorgan un lugar preponderante a la justicia y la legalidad democrática en México. De acuerdo con la encuesta nacional Ciudadanos y cultura de la democracia en México, a la pregunta “de las siguientes actividades ¿cuál debe ser la principal función del gobierno?” la mayoría de los entrevistados (29.9%) respondió “impartir justicia” en primer lugar; en segundo (24.8%), los encuestados opinan que debe “resolver los problemas sociales”; “propiciar el desarrollo de la economía”, aparece en el tercer puesto con 19.7%, seguido por “vigilar la seguridad de las personas” (17.3 por ciento). De quienes escogieron la primera opción, se encuentran los jóvenes de 21 a 30 años (29%) y los de 31 a 40 años (30 por ciento).

---

*En una visión esquemática de la izquierda mexicana, sólo el cardenismo histórico se planteaba el cumplimiento estricto de la Constitución. El Partido Comunista se movía en el respeto a la legalidad buscando siempre su registro electoral, pero sólo por una cuestión de estrategia política, no de principios; lo mismo sucedía con el trotskismo. No obstante, como veremos en seguida, fue el movimiento del “68” el que generó la radicalización de las posturas que cuestionaban la legalidad y que derivaron posteriormente en movimientos armados. Coincidiendo con ese radicalismo apareció desde los años sesenta el marxismo althusseriano, donde se definía a la leyes como parte del aparato ideológico del Estado. En México, esta escuela tuvo numerosos adeptos entre los jóvenes, quienes fueron su principal contingente.


*En la encuesta nacional, Ciudadanos y ... a la pregunta: “Para que mejore la situación del país, ¿cómo deben cambiar las cosas?”, la mayoría (86%), correspondiente al sector juvenil, respondió que poco o poco; en contraste con el grupo de edad de 31 a 40 años, el cual manifestó desear un cambio más rápido.

*Julia Isabel Flores, “Valores básicos de la democracia: la ética de lo público,” en Ciudadanos y cultura en México..., p. 25. Otras respuestas y la respuesta “no sé” completan 100 por ciento
Al buscar encontrarle sentido a la idea de justicia que tenían los entrevistados, refiriéndola a imparcialidad o castigo, se les formuló la siguiente pregunta: "Para usted, ¿cuál de estas frases describe mejor a la justicia: que las leyes sean claras y parejas para todos, o que se castigue a los delincuentes?", la mayoría de los entrevistados (53.4%) señaló que "las leyes sean claras y parejas para todos", mientras que 44% se pronunció porque "se castigue a los delincuentes".12

Justamente, las generaciones más jóvenes son las que piensan que "las leyes deben ser claras y parejas para todos", y coinciden en ello aquellos que tienen mayor escolaridad. De manera significativa, "es la población con mayores niveles de percepción del riesgo, como las mujeres, los mayores de edad y aquellos con menor escolaridad, la que concibe a la ley como castigo".13

Ahora bien, es cierto que las nuevas generaciones tienen percepciones más positivas del marco legal, ya que asocian la función sustantiva del gobierno a la de la impartición de la justicia y a la existencia de leyes claras y parejas para todos, pero aún subsiste una desconfianza considerable sobre el marco legal actual, esto es, del contenido concreto de las leyes en México.

Si, por un lado, los jóvenes coinciden con la mayoría en la disposición al cumplimiento de la ley,14 existe todavía un arraigo relativamente débil de la legalidad en ese sector de la población.15

Esta reserva queda manifiesta cuando se analiza que los sectores jóvenes desconfían más que otros grupos de edad, sobre que su voto en las elecciones se respeta, aun consideran más importante que otros grupos de edad el ejercicio de ese derecho ciudadano.16

* Idem, p. 25. Otras respuestas y la respuesta "no sé" completan 100 por ciento.
* Idem, p. 29. A la pregunta dicotómica sobre la preferencia "de que existan normas para regular el comportamiento de las personas o que la gente se comporte como le parezca", 78% optó por la primera y 18.7% por la segunda. Cabe destacar que el grupo de 18 a 21 años tuvo valores de 73% y 24 por ciento, respectivamente. O sea que uno de cada cuatro jóvenes, a pesar de que ejercen derechos propios de la mayoría de edad, no cree en la función esencial de las leyes.
* Idem, p. 30. 44% manifiesta la creencia de que "el pueblo debe obedecer siempre la ley", 28.6% cree que "el pueblo puede cambiar las leyes si no le parecen justas", y 24.4% cree que "el pueblo puede desobedecer las leyes si le parecen injustas." Nuevamente, sobresale que para los jóvenes los porcentajes son de 39%, 30% y un alto 30%, respectivamente.
* Ana María Fernández Poncela, Cultura política juvenil en el umbral del nuevo milenio, mimeo, 2000, s/p.
II. DESDÉN Y DESENCUENTRO EN LA ESFERA DEL CONOCIMIENTO

A este menosprecio de los jóvenes hacia la ley, se debe sumar el desdén que la reflexión académica en México ha tenido hacia las dimensiones sociales y teóricas que analizamos.

Desde la perspectiva social, la investigación sobre juventud en México, de hechura reciente, ha sido omisa respecto del tema de la legalidad. De acuerdo con un recuento del principal centro de promoción de esa tarea en México, de las siete temáticas que se seleccionaron para agrupar las investigaciones sobre juventud de 1996 a 1999, ninguna tiene que ver con el ámbito jurídico de manera central.17 Sólo aquellas referidas al empleo y a la participación política señalan, de manera secundaria, lo que establece el marco legal, pero sin problematizar lo suficiente lo que se encuentra detrás de esa definición jurídica. Para la investigación social, generalmente el asunto de las leyes ha sido un dato, no una dimensión de análisis.

Como señala José Antonio Pérez Islas, en nuestro país respecto de la investigación sobre juventud, aun existen “discusiones pendientes y lagunas (en algunos casos verdaderos hoyos negros) que todavía quedan por desarrollar […] entre los que destacan: distinguir entre los conceptos de juventud y adolescencia (y) un diálogo más frecuente entre metodologías cualitativas y cuantitativas”.18 De manera significativa, al señalar esos asuntos olvidados o marginales no hace mención del tema, lo que nos da una idea del terreno aún por desbrozar.

Inexplicablemente, la perspectiva de otras ramas de la ciencia social (sociología, antropología, demografía y economía, entre otras) ha dejado de lado toda la producción que se ha realizado desde el derecho. Existen múltiples estudios e investigaciones, desde categorías y conceptos jurídicos que refieren sobre menores, tutor, niñez, familia, padre de familia, etc., los cuales, a pesar de estar fuertemente vinculados a temáticas de juventud, no se han intentado retomar desde la sociología y la ciencia política.

Desde luego, y éste es uno de los principales postulados que orientan este trabajo, considero que tampoco el derecho ha incorporado las perspectivas de las otras disciplinas, impidiendo con ello que el marco legal mexicano responda a la complejidad de sujetos e identidades que exigen satisfacción a sus necesidades y derechos.

Cada cuerpo de conocimientos ha estado apegado a sus postulados teóricos y no se ha planteado incidir uno en el otro, pero sobre todo,
no se ha dado la posibilidad de enriquecer el marco legal, sus instrumentos, y a fin de cuentas, de mejorar el bienestar social de los jóvenes.

Justamente considero que para poder hacer que las miradas sociales fecunden las esquemáticas y áridas visiones jurídicas y, al mismo tiempo, que las panfletarias percepciones sociales encuentren anclajes y sentido de realidad en la concreción del derecho, es necesario plantear un acercamiento conceptual que, en última instancia, permita construir un derecho social de los jóvenes. Esto es, parte de la idea de que no es posible hablar de auténticos derechos sociales de los jóvenes si antes no hay una definición integral del joven como sujeto social y jurídico.

Como señalo anteriormente, lo que genéricamente denominamos como derecho, no ha recuperado, con la debida amplitud y profundidad, los conceptos y visiones que se han desarrollado sobre la juventud desde otros campos de conocimiento. Aunque, para ser más precisos, debemos señalar que existen algunas áreas del derecho que han recuperado, en alguna medida, lo juvenil.

Por un lado, está el ámbito legislativo, que ha tenido magros resultados con respecto de su responsabilidad de enriquecer el marco de leyes. Pero también está la dimensión jurisdiccional, que está referida a los mecanismos y garantías contenidos en el marco normativo que hagan exigibles y justiciables los derechos sociales. A ese respecto, ha habido muchas resoluciones de jueces y magistrados en torno a los menores y la tutela que dan cuerpo y forma a lo que jurídicamente se considera como joven o adolescente. Aunque es necesario señalar que los estudios, proyectos, sentencias y tesis que conforman la doctrina jurídica, tampoco recuperan, con toda su riqueza, las visiones sociales.

Por ejemplo, la tutela jurídica, como responsabilidad obligada del Estado y de la sociedad adulta con respecto de los menores, deja de lado expectativas e intereses por autonomía personal de un joven de 16 años, quien no puede tener el mismo tratamiento de un niño de cuatro años.20

---

20 José Antonio Cruz Parcero, “Los derechos sociales como técnica de protección jurídica”, en Miguel Carbonell, et al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, UNAM, México, 2000, p. 87. A este respecto, vale la pena señalar que la idea de “justiciabilidad” que predomina en el discurso de las organizaciones de la sociedad civil, que han sido de las principales promotoras de los derechos juveniles y que buscan que los derechos sociales expresados en textos legales cumplan con la justicia social que encarnan, se encuentra motivada más por definiciones éticas y políticas, antes que legales. Esto es, centran su acción en el reconocimiento social de hechos sociales más que en su reconocimiento jurídico.

20 Cfr. apartado donde se analiza la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
III. LEGISLACIÓN Y JUVENTUD

La legislación federal, y en esa medida la estatal, que tiene que ver con la dimensión específicamente juvenil, se ha elaborado apenas en años recientes. A pesar de la existencia de múltiples leyes que involucran a la población joven, donde destacan las que tienen que ver con la función educativa, las leyes en México no han sido concebidas y pensadas a partir de las necesidades de los propios jóvenes.

Desde el punto de vista de la institución encargada de atender a los jóvenes en México, se afirma que “la mayoría de esta legislación engloba de manera genérica al sector juvenil y sólo pocas de estas leyes y códigos hacen mención específica sobre los jóvenes, o sobre los límites o alcances que tiene esta edad concreta que se ha llamado juventud”, de tal forma que esa especificidad de lo juvenil “se puede encontrar de tres maneras dentro de la normatividad: a) Legislación donde se establecen los límites específicos de edad para determinados derechos u obligaciones; b) Legislación donde se mencionan específicamente a los jóvenes o a los adolescentes, y c) Legislación que por su ámbito de incidencia aborda temáticas directamente relacionadas con el sector juvenil”.

A diferencia de esta opinión, considero que la falta de especificidad de lo juvenil en la legislación es enorme, y queda de manifiesto cuando analizamos que las leyes no partan de considerar las particularidades de ese grupo etario, conformado por personas cuyas identidades se encuentran marcadas por consideraciones de edad en torno a dimensiones culturales que se expresan en expectativas y necesidades muy particulares y diferentes, las cuales encarnan y la diferencia de otros grupos de población.

Las leyes consideran a los jóvenes, pero no lo juvenil, del mismo modo como sucede aún con buena parte de la legislación para mujeres. En este caso, hay sectores que aducen que al constituir las mujeres la mitad de la población, y el hecho de que las leyes y políticas sociales estén planteadas para toda la población, se debe aceptar que las mujeres ya son objeto de derechos en México; explicación que no resiste ser confrontada desde una perspectiva de género. Más adelante volveremos a este punto, a fin de mostrar que una visión liberal igualitaria de la ley puede ser un verdadero obstáculo para la equidad.

Parte del hecho de que exista esa ausencia de la dimensión juvenil se debe a que si bien se ha avanzado en los mecanismos de consulta directa con los jóvenes, aún éstos no dejan de ser un tanto dirigidos por una sociedad adulta que busca saber qué quieren los jóvenes, para ella decidir qué quieren de los jóvenes.

Como veremos a continuación, existen diversos obstáculos que, de distinta manera e intensidad, han influido para que la elaboración de un marco legal acorde con la realidad juvenil se concrete, y para que

...
se eliminen barreras que han abonado para que continúe el desencuentro entre la ley y la juventud.

1. Primer obstáculo: la ausencia de los jóvenes en los espacios de toma de decisión de las leyes

Uno de los factores que inciden en la falta de contenido juvenil en las leyes, se deriva de la tardía incorporación de los jóvenes a los espacios de decisión y, más concretamente, al Poder Legislativo. No abordaremos aquí las cuestiones político-electorales que estimulan o limitan ese acceso, sino la forma en que se expresa la ausencia de una perspectiva juvenil en la elaboración de una ley clave para ello.  

Apenas, en 1998, por iniciativa de diputados de diversos partidos representados en la Comisión Especial de Juventud de la Cámara de Diputados, se propuso y aprobó establecer la edad mínima para ser senador en 25 años y en 18 para ser diputado. Esto ha sido un avance en lo que a los derechos políticos de los jóvenes se refiere, pues como se apunta en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 55 de la Constitución Política “(esta medida) constituye una consecuencia natural del otorgamiento de la ciudadanía a los jóvenes a partir de los 18 años. Si la Nación les reconoció capacidad cívica a esa edad y les confirió el derecho a participar con sus votos en la conformación del destino general, cumple ahora con allanarles el camino para acceder, a más temprana edad, al Congreso de la Unión”.

No obstante, debido a la importancia de ese derecho (otorgado), no deja de ser simbólico el hecho de que en una sola sesión, apoyada por los mismos diputados, se elevara la iniciativa de reforma de los artículos 55 y 58 constitucionales, para cambiar el límite de edad para ser diputados o senadores, y que en una sola sesión, en diciembre de 1998, se aprobaran ambas iniciativas, prácticamente, por unanimidad, las cuales llevaban sendas exposiciones de motivos que podrían ser intercambiables, y que me parece que hay que destacar, que tal vez habría servido para llevar la edad mínima en los dos casos a 18 años.

¿Por qué es posible acceder a la Cámara de Diputados a los 18 años y no al Senado? Debido al sentido de la argumentación, era posible acceder a los 18 años a cualquiera de las dos Cámaras, en virtud de que se...

---

23 Una de las nuevas vetas de reflexión sobre juventud la constituye, sin duda alguna, la que se refiere a su participación política. Al respecto sólo mencionaré que es cada vez mayor la integración de jóvenes en el Poder Legislativo, y ha sido una preocupación apenas reciente de los partidos políticos asegurar espacios formales de participación juvenil. En algunos casos, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluso estatutariamente se tienen definidas cuotas que aseguran esa participación. Véase, Ana María Fernández Poncela, Juventud y política: balance y perspectivas: fotocopias, 2000.

24 El dictamen referido se encuentra disponible en www.cddhcu.gob.mx los subrayados son míos.

Juene es
desprendía de la intención de cualquiera de las dos exposiciones de motivos (que era exactamente la misma), la idea de que a los 18 años ya se es ciudadano y, por lo tanto, ya se deben tener todos los derechos a plenitud. ¿Por qué diferenciar la edad de acceso a ambas Cámaras, estableciendo más edad para la de senadores? Algo hay sobre que el Senado es una posición política de más responsabilidad, o también se puede argumentar en términos de la experiencia necesaria para representar a una entidad federativa, pero nada de ello se justifica en la exposición de motivos. En realidad, lo que impide bajar el límite de edad para acceder al Senado, son prejuicios que terminan por sentar una discriminación al respecto. La visión adulta que permea este asunto, no deja de ser paterna y limitativa para los jóvenes. Éste es sólo un ejemplo de cómo esa perspectiva juvenil es acotada por los intereses adultos en la elaboración de las leyes.

En la medida en que más jóvenes se incorporen a este espacio de decisión privilegiado que es el Poder Legislativo, creo que serán mayores las oportunidades de ir revirtiendo esa visión predominantemente adulta de la ley.25

2. La poca importancia de lo juvenil en el Congreso

Otra de las razones de esta falta de especificidad de lo juvenil en las leyes, es la poca importancia que le ha dado al asunto la propia sociedad adulta y, en particular, la clase política mexicana que la representa en el Poder Legislativo.

En 1995, apenas fue establecida una Comisión Ordinaria de Asuntos de la Juventud en la Cámara de Senadores. Por lo que hace a la Cámara de Diputados, en 1994 se acordó la conformación de una

---

25 Estoy lejos de creer que éste sea sólo un asunto del número de jóvenes legisladores, pues muchos de ellos son portadores, desde temprana edad y en sus distintas esferas de actuación, de esa visión adulta, pero considero que existe una correlación positiva entre la edad de los legisladores y la posibilidad de construir espacios y normas que apunten a configurar una legislación desde una perspectiva juvenil.
Comisión Especial de Asuntos de la Juventud. En 1997, en la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados se volvió a acordar la conformación de la Comisión de Juventud, aunque continuó con el carácter de especial, situación que muestra la poca sensibilidad que privaba respecto del tema de juventud.

Ese poco interés que señalamos, sumado a la escasa iniciativa de los diputados que participaron en esa Comisión, llevó a que, además de las reformas a la Constitución Política para disminuir el mínimo de edad para contender por puestos de elección popular, la Comisión Especial de la LVI Legislatura sólo se abocara a analizar y dictaminar la iniciativa de crear la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMI), que se inició y dictaminó en la Comisión de Atención a la Juventud del Senado de la República.

En efecto, fue en el Senado donde se acordó establecer el IMI, como una instancia del Ejecutivo Federal, a fin de desarrollar políticas integrales para atender a la población de entre 12 y 29 años de edad.

Haciendo un balance, luego de haber sido establecidas tres legislaturas, y que en el caso de la Cámara de Diputados, a partir de que en la LVIII Legislatura la Comisión de Juventud y Deporte ya adquiere un carácter de ordinaria, podemos decir que los resultados, en términos de legislación para los jóvenes en la que tuvo competencia esa Comisión, son magros.

La única Ley que como tal se elaboró y que tiene una especificidad juvenil fue la que creó el IMI, la cual, dicho sea de paso, sólo asegura la permanencia de ese espacio, pero no define un marco mínimo de derechos de los jóvenes. Además, la reforma de la Constitución sobre la edad para ser diputado o senador, fue más preocupación de la clase política y de los cuadros juveniles de todos los partidos inserta en ella, que una verdadera demanda social.

Por otro lado, se legisló en materia de deporte, en la cual la Comisión de Juventud no tuvo participación alguna, aunque dos cuestiones de esa Ley destacan con respecto del tema que aquí abordó. Una se refiere al establecimiento de Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, los cuales son asociaciones civiles cuyo objetivo es fomentar

---

26 La diferencia sustancial entre una Comisión Ordinaria y una Especial consiste en su temporalidad, pues la Especial se disuelve una vez que ha cumplido con el objetivo por el cual fue conformada, o cuando ha concluido la Legislatura que la creó. Véase artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

27 De acuerdo con un Informe de la propia Comisión, que abarca su primer año de actividades, "se convocó, a lo largo del año, a 12 reuniones de trabajo para el desahogo de su agenda. Lamentablemente, sólo en cuatro ocasiones se alcanzó el quórum reglamentario, "siendo que de los 29 integrantes, ninguno concurrió a las 12 reuniones programadas, sólo uno a 11, dos a 10 y en general sólo 11 de los 29 concurrieron a más de la mitad de las reuniones. Informe de la Comisión de Juventud, LVIII Legislatura, puede ser consultado en la página electrónica de la Cámara de Diputados www.cddchu.gob.mx

28 Además de dar opiniones sobre la Ley Orgánica de la UNAM, hacer foros en varias ciudades del país y viajar, la Comisión conoció sólo por trámite de otras iniciativas que tenían que ver con jóvenes, pero que al día de hoy no han sido dictaminadas, y ni siquiera que comentaremos adelante, sobre reforma constitucional.

29 Artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

30 Confrontera esa limitación, por ejemplo, con la Ley de los Jóvenes del Distrito Federal, que comentamos adelante.

31 Ley General del Deporte, Diario Oficial de la Federación, 6 de julio de 2000.

JUVENES
y coordinar la participación de estudiantes de distintos niveles educativos en la práctica del deporte. Otra tiene que ver con el fomento de las Olímpiadas Infantiles y Juveniles, las cuales permiten participar a todos los jóvenes del país en competencias deportivas, sin necesidad de que se encuentren afiliados a algún organismo deportivo.\textsuperscript{32}

Fuera de esas leyes, de las pocas medidas estrictamente legislativas que la Comisión se abocó a resolver (puntos de acuerdo, excitativas, etc.), fueron estrictamente preocupaciones adultas, las cuales marcaron una pauta del las actividades de la Comisión. Por ejemplo, durante la LVII Legislatura, la Comisión estableció dos subcomisiones que se dirigieron al análisis del establecimiento, en la Constitución Política, de los 18 años como la edad para ser penalmente responsable; y otra, sobre los medios de comunicación y sus mensajes a la infancia y la juventud.\textsuperscript{33} En la LVIII Legislatura, el tono no ha variado, pues fuera de analizar la Ley Federal de Juventud que comentaremos adelante, la Comisión se ha centrado en cuestiones de deporte (“Punto de Acuerdo contra la Barras Bravas del Fútbol” y Sesión Solemne para distinguir a los competidores en los Juegos Paralímpicos), reuniones con funcionarios y la organización de algunos foros.\textsuperscript{34}

Otra ley de suma importancia que analizaremos adelante es la Ley para la protección niñas, niños y adolescentes, en la cual, como un hecho que habla por sí solo, la Comisión de Juventud no tuvo participación alguna.

3. El atraso de las legislaciones estatales

Como dato que muestra el reto que implica ese alejamiento de las leyes de la realidad juvenil en las entidades federativas, diremos que las únicas leyes que tienen que ver con juventud en los estados, son aquellas que se emitieron para crear los respectivos institutos estatales de juventud. A imagen y semejanza, y muchas veces como meras copias de la legislación federal; en más de 15 estados de la República, de 1999 a la fecha, fueron expedidas las leyes que dan sustento a sendos institutos estatales.\textsuperscript{35}

Un caso que merece comentarse aparte es el de la Ley de los Jóvenes del Distrito Federal, expedida en abril de 2000 por la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La mencionada Ley tiene algunos aspectos ventajosos, como el que define al joven como sujeto de derecho, regula el funcionamiento del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, norma las medidas y acciones que

\textsuperscript{32} Información tomada de Jóvenes e instituciones en México..., op. cit., p. 138.
\textsuperscript{33} Informe de la Comisión de Juventud LVII Legislatura, disponible en www.cddhcu.gob.mx
\textsuperscript{34} Informe de la Comisión de Juventud LVIII Legislatura, disponible en www.cddhcu.gob.mx
\textsuperscript{35} En los casos restantes, alrededor de 10, los Institutos fueron creados por decreto del Ejecutivo local. Cabe anotar que en los pocos legislativos locales donde existen comisiones que aborden asuntos de la juventud, éstas se encuentran enmarcadas en las que se dedican al deporte, temática a la que esquemáticamente ha sido vinculada no sólo en el ámbito Legislativo, sino también en las políticas que impulsan los poderes ejecutivos estatales y el mismo federal, hasta fechas recientes.
...contribuyan al desarrollo integral de la juventud, además de establecer un Título Segundo sobre los derechos y deberes de los jóvenes, en el que se busca dar garantía y protección legal a una serie de prácticas por las que los jóvenes generalmente son sancionados (formas de vestir, expresarse, agruparse, etcétera).  

Esta Ley, no obstante de tener un sentido progresista, plantear y establecer mecanismos para hacerla exigible, en términos generales, no ha tenido la fuerza política ni legal para ser tomada en cuenta. Al estar enmarcada en el esquema del derecho mexicano, el cual como nos señala Cruz Parcero, no contempla mecanismos jurisdiccionales reales y efectivos para hacer exigibles los derechos sociales; es decir, los jóvenes del Distrito Federal no tienen posibilidades de apelar el cumplimiento de la ley.

Otra muestra del desapego de la legalidad hacia los menores, en muchos estados de la República, es la falta de marcos normativos en cuestiones tales como Leyes de Tutela para Menores Infractores, Leyes de Consejos Estaticales y Leyes de Protección de Infantes.

4. La inexistencia del sujeto jurídico y legislativo llamado juventud

Justamente, la ausencia de leyes en el ámbito estatal sorprende, porque los Congresos locales son los que tienen la posibilidad de legislar sobre juventud en sus mismas entidades. Señaló la posibilidad y no la atribución, porque al igual que en el caso del Congreso de la Unión, ello depende de las atribuciones que cada Poder Legislativo local tenga al respecto.

En efecto, el obstáculo más importante para legislar en el ámbito federal con jóvenes, lo constituye la falta de atribuciones que tiene el Congreso de la Unión en ese aspecto. A pesar de que la juventud es parte de la realidad social y de que, en ese sentido, existiría materia para legislar, de acuerdo con la Constitución, ni el Congreso, ni las Cámaras de Diputados o Senadores, en forma exclusiva, tienen facultades de legislar en esa materia. De acuerdo con el artículo 73 constitucional, en el largo listado de facultades del mismo, no existe ninguna referencia directa a los jóvenes del país. Del mismo modo, no existe atribución exclusiva, para alguna de las dos Cámaras en los artículos 74, 75 y 76 constitucionales. De acuerdo con lo anterior, habría materia legislativa, pero no facultad legislativa.

Lo significa que, en materia de juventud, el Congreso no tiene facultades para establecer acciones concurrentes con estados, municipios y federación en materia de juventud. Pero tiene atribuciones para establecer leyes que creen instituciones del gobierno federal, como fue el caso del IMI. También tiene la capacidad de establecer las

---

* Tan no cuenta con mecanismos jurisdiccionales y tan no tiene fuerza la mencionada Ley que a casi dos años de haber entrado en vigor, por decisión política del actual Jefe de Gobierno, no se ha cumplido el Transitorio Segundo, que establece la entrada en operación del Instituto en cuestión para 2001.
bases para la coordinación y complementariedad de acciones en las cuales podrían participar las entidades federativas y los municipios que así lo decidan, como en una ley tipo de "coordinación en materia de juventud".

Esta ausencia de facultades ha impedido que se legisle a nivel federal en esta materia. En diciembre de 2000, en la VIII Legislatura, el diputado federal Jaime Martínez Veloz propuso la iniciativa de una ley federal de juventud que contemplaba, entre otras cosas, crear un Consejo Nacional de la Juventud, en sustitución del actual Instituto, además de una serie de derechos de la juventud, estableciendo la concurrencia de estados, municipios y federación para ello. Precisamente, por esta ausencia de facultades constitucionales, por plantear una Ley Federal que invade e infringe atribuciones conferidas por otras leyes a otras autoridades y por contravender la autonomía estatal y las leyes en la materia de cada entidad, la iniciativa ha sido dictaminada en sentido negativo por la Comisión respectiva, y rechazada por el pleno de la Cámara de Diputados, un año y medio después.38

Como se puede apreciar, la manera de establecer la capacidad de legislar, a nivel federal, en materia de juventud, es señalar, en el artículo 73, como facultad del Congreso esta atribución, o bien elevar a rango constitucional el concepto de juventud, en el artículo 40. digamos, a fin de que exista el sujeto jurídico y legislativo de juventud, a la forma en que se dio en el proceso legislativo sobre la niñez.

A ese respecto, cabe mencionar que a mediados de la VIII Legislatura se presentó la iniciativa de reformas al artículo 40. de la Constitución Política en materia de derechos de los jóvenes, por el diputado Víctor Rubén Montalvo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual, en el presente, a pesar de haber sido turnada para su análisis a las Comisiones Especial de la Juventud y a la, en ese entonces, denominada Gobernación y Puntos Constitucionales, permanece en calidad de congelada.

---

38 Desde enero de 2002, se encuentra pendiente de discutir el dictamen para la consideración del pleno de la Comisión, pero debido a la falta de quórum, no se ha podido llevar a cabo el trámite legislativo.
5. La ortodoxa y predominante doctrina jurídica liberal del derecho mexicano frente a los derechos sociales

En el mundo contemporáneo, la universalización de los derechos es un proceso civilizatorio que, aun con obstáculos diversos, avanza por encima de las fronteras nacionales. Hoy en día, esta universalidad se da respecto de los titulares y de los destinatarios de esos derechos; la primera consiste en el reconocimiento de que “los derechos humanos son derechos que corresponden a todos los seres humanos”, con independencia de un título adquisitivo; los destinatarios (en cuanto que obligados por los derechos) serán no solamente los seres humanos en lo individual, sino también los grupos y los Estados.  

No obstante, ese proceso no significa la unicidad y uniformidad de los derechos para todos los seres humanos. Partiendo de que existen una serie de derechos humanos mínimos a todas las personas, como puede ser el derecho a la alimentación, los procesos de diferenciación social, de una compleja reestructuración de la división internacional del trabajo, así como de una creciente redefinición de las bases de la legitimidad y gobernabilidad democrática, han hecho que la emergencia de nuevos sujetos sociales demande un orden social que reconozca nuevos derechos. Ante este proceso, el marco de los derechos, en el mundo, ha devenido en un proceso de especificación.

La especificación, que pretende dar contenido expreso del sujeto y del objeto concretos de los derechos, como señala Carbonell, “se ha producido sobre todo en el campo de los derechos sociales, en la medida en que la igualdad y la libertad genéricamente expresadas no han sido suficientes para proteger todos los intereses de grandes grupos humanos marginados o que conviven en la sociedad de forma desventajosa”.  

A ese respecto, el caso de México es el de un país cuyo marco de derecho recién se pone a tono con el mundo democrático, en términos de dar especificación a los derechos universales ya reconocidos de manera formal en sus leyes desde tiempo atrás. El redimensionamiento del multiculturalismo y de la igualdad, que dejan atrás las visiones liberales ortodoxas, que con igualdad formal generan desigualdad social, está empezando a ser parte de las leyes.

No obstante, en el caso de los llamados derechos sociales, el trabajo legislativo se ha centrado en establecer leyes que resultan prestaciones antes que derechos. Sin ser obligación del Estado, sujeto a la disponibilidad de recursos y a la voluntad del poder público, esos derechos se enmarcaron más en una doctrina conservadora, que según José Ramón Cossío, los ve más como un programa social y que incluso

---

39 Miguel Carbonell, La Constitución en serio..., 2001, p.13. La idea es retomada por ese autor, de una tesis de Robert Alexi expuesta en La institucionalización de los derechos humanos en el Estado constitucional democrático, Derechos y libertades, Madrid, p. 25. La idea de adquisitivo en Alexi se refiere a que son derechos para cada individuo, independientemente de que pertenezca a algún grupo o identidad cultural determinada.
40 ídem, p. 21.
41 Véanse capítulos segundo y tercero del libro citado de Carbonell.
no considera "tales normas como estrictamente jurídicas, sino tan sólo fruto de la Revolución".42

De esta manera, en la doctrina dominante del constitucionalismo mexicano, “por los derechos sociales se entendieron aquellas normas constitucionales que fueron resultado de los postulados de la revolución; que le confirieron atribuciones a los órganos del Estado para imponer obligaciones a cierto tipo de particulares, y que no impusieron obligaciones directas de carácter patrimonial al Estado”.43

Junto al hecho de que aún falta por incorporar una serie de derechos sociales al texto constitucional, a lo que obliga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), como es el caso del derecho a la alimentación, se encuentran otros problemas del derecho mexicano que hacen muy difícil establecer o hacer valer una serie de derechos para los jóvenes.

Uno de ellos es el que señala Carbonell, y el cual tiene que ver con el pobre papel que han jugado, y siguen jugando, los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos "no se trata solamente de la no existencia de vías jurisdiccionales internas para proteger los derechos sociales, económicos y culturales, sino en general del funcionamiento deficiente del poder encargado por mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales".44

6. El caso de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

De manera deliberada dejamos hasta este momento del análisis de las leyes sobre juventud, lo relacionado con la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta Ley encierra muchos cambios en el marco de la legislación mexicana que nos interesa señalar, aunque sea de manera panorámica.

En principio, esta Ley es un buen ejemplo de los procesos de especificación de las leyes que señalábamos anteriormente. Es el resultado de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por unanimidad por la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas en 1989 y firmada por México en el siguiente año.

De la misma manera, es interesante que haya iniciado el proceso legislativo y se haya aprobado esta ley, aun cuando de manera textual no se señale a los adolescentes en ninguno de los párrafos del artículo 40. constitucional. Ello a pesar de que en la Convención mencionada se reconoce como “niño a todo ser humano menor de 18 años de edad,

43 Juan Antonio Cruz Parecer, op. cit., p. 90.
44 Miguel Carbonell, op. cit., pp. 66-67. Otra carencia que menciona el autor es el "desorden que impera en el capítulo primero de la Constitución", que impide no sólo comprenderlo, sino aplicarlo.
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad**;**45 pues en la Constitución sólo se habla de niños y de familia. La explicación se encuentra en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1999 las convenciones y tratados internacionales son parte del cuerpo de las leyes de nuestro país, que se encuentran por encima de las leyes generales y sólo por debajo de la Constitución.

Esta Ley es importante para el tema que discutimos, en la medida en que aborda de manera central una dimensión importante de la juventud. Aunque, a mi parecer, no logra diferenciar plenamente a los adolescentes de los niños; pero por primera vez, la ley asume como sujeto jurídico a los adolescentes, o sea aquellas personas que tienen “entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos”. 46

Algunas de las implicaciones que ese reconocimiento significa, aun y cuando la ley lo sigue considerando un menor sin distinción de niño, que éste adquiere una condición de titular de algunos derechos

*45 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1o.
*46 Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, artículo 2o.
y obligaciones, que antes sólo le eran propias, en estricto sentido, a aquellas personas con estatus de ciudadanía. Aunque muchos de esos derechos los ejerce a través de la persona o instancia que lo tutela, custodia o que tiene la patria potestad.

De hecho, en la nueva Ley, el esquema tutelar basado en la primacía de la familia, que no escucha al niño, que predominantemente castiga y no amonest, es transformado por otro que busca educar, no sólo al niño, sino a los agentes que influyen en su desarrollo, estableciendo mecanismos y actores jurisdiccionales específicos para la niñez y la adolescencia, aunque sólo sea en el ámbito penal, tales como ministerios públicos y jueces especializados, además de defensores de oficio. En una visión global, el esquema tradicional donde la familia es la garantía del desarrollo del niño, es sustituido por otro donde el poder público y la sociedad misma tienen obligaciones ineludibles.47

No obstante ese conjunto de adelantos, desde mi perspectiva, la ley aún resulta desventajosa para el adolescente. En principio, lo que significa protección para el niño, que se da a través de tercera persona, para un adolescente de 16 años puede constituir una subestimación. Por ejemplo, dentro del derecho a la salud, no se considera el derecho a la salud sexual, pues las pequeñas diferencias que se establecen entre niños y adolescentes en la ley, no tienen que ver con subdesarrollo, sino en términos de su condición social, esto es, si está marginado socialmente o no.

La ley tampoco distingue entre niños y adolescentes en el derecho al juego, a lo que éstos esperan de los medios de comunicación masiva, a las pautas que ellos se van forjando para su desarrollo psicosocial, etcétera. Respecto del adolescente, y gracias a los resabios del paternalismo que sustenta una doctrina tutelar conservadora en el derecho, el único aspecto de la ley en el que se distingue al niño del adolescente es en el proceso en el caso de infracción penal.

De esta manera, la tutela y la división tajante entre menores y mayores, entre el menor de 18 años y aquel que cuenta con 18 años o más, no resulta benéfica para aquella población ubicada entre los 12 y 17 años.

III. EL MARCO CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 34

El artículo 34 constitucional señala textualmente:

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años y
II. Tener un modo honesto de vivir

Esta disposición constitucional es una de las principales tesis en la que la sociedad mexicana plasma su idea de lo que son los jóvenes, aunque no haya una referencia directa a ello. Relacionado directamente con el artículo 30, donde se señala quienes son aquellos que tienen la condición de mexicanos, en este artículo se hace una distinción entre aquellos que siendo mexicanos tienen el status de ciudadanos.

En ese status están contenidos los derechos y las obligaciones que, en principio, derivan de la condición objetiva de la edad y de determinadas capacidades intelectuales. Como señala Ignacio Galindo Garfias, heredera de la tradición griega y romana, “en la sociedad moderna el ciudadano participa en la formación de la voluntad popular, es decir, en el ejercicio de la soberanía del pueblo mexicano y en la estructura misma del poder público y de los órganos del Estado”.

De esta manera, el status de ciudadanía se encuentra referido de manera directa respecto de sus derechos en la capacidad de elegir, o de ser elegido para todos los cargos de elección popular o ser nombrado para cualquier empleo o comisión pública, el derecho de tomar parte de los asuntos del país, así como de tomar las armas para la defensa de la República, además de ejercer el derecho de petición.

Por lo que hace a sus obligaciones, en la Constitución, éstas se encuentran vinculadas a las mismas dimensiones de los derechos, aunque añade el de la participación en las funciones electorales, en el registro de sus propiedades, declarar su profesión, así como inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

De esta forma, desprendemos tres dimensiones en las que se expresa el status de ciudadanía en México, asociado a la edad: la formación de la voluntad popular, el ejercicio de las armas y la participación cívica.

Por lo dispuesto en los artículos señalados, la sociedad mexicana considera, mediante lo que establece en su Carta constitucional, que sólo quienes cuentan con 18 años o más se encuentran en la capacidad de formar la voluntad popular, tomar el ejercicio de las armas, y participar cívicamente. O visto desde otro punto de vista, que son sólo las aptitudes en el terreno político, las del campo cívico y las militares que se señalaron anteriormente, las que habilitan a alguien como ciudadano.

---


Joven.es
1. La aptitud guerrera como rasgo de ciudadanía en el joven

Al establecer el ejercicio de las armas a los 18 años como una acción distintiva de entre quienes ya cuentan con determinadas capacidades, de aquellos que se considera que aún no las tienen, la sociedad mexicana consagra en las leyes un ritual fundamental del reconocimiento de las aptitudes guerreras, que diversas sociedades, en diversos momentos de la historia humana, han establecido para sus miembros más jóvenes. La toma de las armas, expresado en el alistamiento al servicio militar al cumplir los 18 años, es el momento y la forma en la cual la sociedad le dice a sus jóvenes que están listos, que son capaces y dignos de las armas, son autosuficientes. En ese sentido, la aptitud guerrera se prueba en el ejercicio de las armas para la defensa de la patria, y con ello, se habilita alguien como ciudadano.

Cabe señalar que, en artículo 31 de la Constitución, esta idea de que la incorporación a la milicia es señal de que se tiene adhesión a la patria, se expresa nítidamente. En este artículo se señalan como obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar;

III. Alistarse y servir en la guardia nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior.  

Del artículo 31 constitucional, me interesa destacar que no señala que sean obligaciones exclusivas de los ciudadanos, sino que lo son de todos los mexicanos, incluidos los menores de edad: recibir instrucción militar, asumir la disciplina militar, conocer el manejo de las armas y alistarse en la guardia nacional. Estas acciones militares, al ser el modelo de mostrar el amor, adhesión y lealtad a la comunidad y al bien común, encuadran plenamente en un arquetipo guerrero de la autodeterminación personal y grupal de muchas sociedades que giran en torno a la lógica de la guerra.

Ante este señalamiento claro, no hay salidas para interpretaciones parciales de la misma, como la que se ha hecho desde leyes secundarias con respecto del servicio militar, o como lo pretende el constitucionalista Ignacio Galindo Garfias, cuando apunta:

[...] por lo que atañe a la instrucción militar de los menores y al deber impuesto a los mexicanos de asistir al lugar que el ayuntamiento de su residencia señale, para recibir instrucción militar...y el poder alistarse en la Guardia Nacional, debe apuntarse que por lo que se refiere a los mexicanos varones que han cumplido...

49 Derechos del pueblo mexicano..., p. 743.
50 En sentido estricto, las obligaciones que derivan del servicio militar se cumplen a los 18 años, aunque los hombres, en términos de cumplir esa edad, se inscriban desde un año antes, véase artículo 50. de la Ley del Servicio Militar.
18 años, este deber se cumple acatando las disposiciones de la Ley del Servicio Militar Obligatorio.\footnote{Idem, p. 748.}

No hay lugar a dudas, pues el constituyente de 1917 consideró necesario que los menores recibieran instrucción militar, además de que no hace distinción entre mujeres y hombres, como podemos ver en los debates que llevaron a la conformación de ese artículo en 1917:

En la 45a. sesión ordinaria, celebrada el 16 de enero de 1917, se leyó el siguiente dictamen sobre el artículo 31 del Proyecto de Constitución: Ciudadanos Diputados: Examinando con atención debida el artículo 31 del proyecto de reformas, se ve desde luego que en él hay dos innovaciones principales que le dan más fuerza y consistencia que la que tenía dicho artículo en la Constitución de 1857.

La primera relativa a que los menores de 10 años concurran a las escuelas públicas o privadas, durante el tiempo que marca la ley de instrucción pública de cada estado, a recibir la educación primaria elemental y la militar; y la segunda referente a la obligación que tienen los mexicanos de asistir [...] a recibir instrucción militar [...].

[...] La Comisión estima, sin embargo, pertinente hacer a este artículo dos ligeras modificaciones. Se imponen obligaciones a los que estén capacitados para cumplirlas, y la mente de la ley en este caso es que si no se cumplen las referidas obligaciones, quede desde luego sujeto el infractor a la sanción correspondiente [...] para evitar interpretaciones torcidas [respecto de quien es la obligación de la concurrencia del menor a la escuela, si del padre o del hijo] ha creído la Comisión que es mucho más lógico el imponer como obligación de los padres o tutores que envíen a los niños a las escuelas.

Tampoco estima racional la Comisión la edad de 10 años que se fija como máximo a los niños para que puedan ser obligados a concurrir a las escuelas a recibir la educación elemental [...] La Comisión ha juzgado prudente, en consecuencia, que en tanto que un niño no hubiese cumplido quince años de edad, están en obligación sus padres o tutores de enviarlo a la escuela con el fin de que reciba instrucción primaria elemental militar.\footnote{Idem, pp. 762-763. No hubo modificaciones al respecto en el dictamen de los constituyentes. Cabe señalar que por lo que se refiere a la fracción i de este artículo, privó el mismo texto desde 1917 hasta 1993, cuando se modificó con las reformas que hicieron de la educación secundaria un nivel educativo obligatorio. El cambio consistió en eliminar la acotación que establecía el rango de edad de los menores, pues antes de ella "hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran...".}

El Constituyente de 1917 dejó clara su intención de vincular el compromiso con la nación y la inclusión de la familia, en particular, a través de los padres o tutores, de la formación marcial del menor.

En ese sentido, no hay lugar a dudas, el Constituyente de 1917 dejó clara su intención de vincular el compromiso con la nación y la inclusión de la familia, en particular, a través de los padres o tutores, de la formación marcial del menor. Por último, sólo cabe preguntarse si la Ley Federal del Servicio Militar y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional no mal interpretan o incumplen la Constitución, al excluir a los menores y a las mujeres de la instrucción militar.

Para considerar la vigencia de esa aptitud guerrera como una forma mediante la cual el joven se habilita como ciudadano, establecida hace 85 años y luego de una etapa en donde las armas definían el rumbo de la nación, cabe señalar que, hoy en día, los jóvenes y, en general, la
sociedad mexicana no consideran que la aptitud guerrera sea definitoria de la identidad juvenil y ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, 85% de los jóvenes dijo estar dispuesto a participar “por la paz”, contra sólo 15% que dijo no estarlo.53

2. La participación política como rasgo de ciudadanía en el joven
Volviendo al artículo 34, declamos que la otra dimensión de la ciudadanía estaba dada con relación a la formación de la voluntad popular. En cuanto a ello, la contradicción de fondo que existe en la Constitución, que se ha extendido sin modificarse desde 1917, la cual consiste en que, por un lado, se afirma que a los 18 años al joven le son reconocidas las condiciones para elegir a los representantes populares; pero, por otro lado, se le niegan esas mismas condiciones para ser electo (artículos 55, 58 y 82 de la Constitución).

Aunque a partir de 1998, al cumplir la mayoría de edad se adquiere también la capacidad de cumplir con el requisito de edad para ser diputado; el hecho de que durante 85 años (si sólo nos remitimos a la Constitución de 1917) fuera de otra manera, nos habla de que existan algunas razones, explicaciones o justificaciones que iban en contra de ese reconocimiento de las capacidades de los jóvenes.

A esta cuestión se suma el que, hoy en día, todavía alguien que adquiere la ciudadanía a los 18 años, no pueda ser candidato a senador (25 años es el requisito) o para presidente (35 años). Ante ello, vale la pena preguntarse ¿cómo se ha justificado esta discriminación, la cual por cierto viola el artículo 1.o. de la Constitución?54

Según Ignacio Galindo Garfias,

[...] esta característica de la ciudadanía, de participar en la formación y en la expresión de la voluntad del Estado, exige necesariamente madurez intelectual en el sujeto titular de ese poder (capacidad de discernimiento), y una voluntad libre y suficientemente esclarecida, para participar en las determinaciones que afectan a los demás integrantes del grupo social. En ese aspecto, el ordenamiento jurídico establece una presunción de capacidad juris et jure, derivada del hecho de haber cumplido 18 años de edad.55

Este tipo de explicaciones, más que estar fundadas en la razón, como pretende la mencionada capacidad, parece estar basado en los prejuicios. A la manera del discurso del padre frente a los convidados en las 15 primaveras de su hija, cuando le mira a los ojos y le dice “florecita que hoy te abres a la lluvia y a la luz del sol”, las explicaciones que juristas, legisladores, políticos, policías, padres de familia y demás prototipos de adulto mexicano contemporáneo, dirán que sólo a los 18 años se es responsable de sus actos.

53 Encuesta Nacional de Juventud. Resultados preliminares, Instituto Mexicano de la Juventud, noviembre de 2000, p. 33. Sólo la disposición a participar en actividades “por el respeto de los indígenas y en defensa del medio ambiente”, superaron esta actividad con 87 por ciento.
54 En el artículo 1.o. de la Constitución se señala que ningún mexicano podrá ser discriminado, entre otras razones, por cuestiones de edad.
55 Idem, p. 1112.
Es necesario preguntarse 85 años después de establecido ese rasero, si antes de los 18 años los jóvenes de hoy están, o no, preparados para participar en la cosa pública. Una buena parte de la sociedad adulta aún hoy cierra los ojos al peso social que tienen los jóvenes, quienes tienen 10 años promedio de escolaridad, muchos de ellos estudian y trabajan; colaboran con el gasto familiar; en casi todos los temas públicos tienen opiniones más progresistas y sensatas que muchos adultos,\textsuperscript{36} etcétera. Y quienes cada día se emanan más tempranamente de la tutela adulta, aun cuando enfrentan problemas para ser más independientes económicamente, tener mayor capacidad para administrar los recursos disponibles, mayor autonomía personal y constituir un hogar propio.\textsuperscript{37}

Pero no es de extrañarnos que prive esa visión en la ley, si aún, en la doctrina jurídica mexicana, existen consideraciones del siguiente tipo “quien no disfrute plenamente de sus facultades mentales y volitivas (menores de 18 años y mayores incapacitados) no puede ejercer ninguna de las prerrogativas (facultades) del ciudadano, ni asumir responsabilidades que el ejercicio de esas prerrogativas impone la Constitución a los ciudadanos”\textsuperscript{38}

\textbf{IV. CONCLUSIONES}

Como podemos apreciar después de este análisis, existen diversos factores de gran peso que influyen en la estructuración de un marco normativo favorable a los jóvenes en México. Factores de orden político, como los intereses de los partidos y las prioridades y prácticas de la clase política; una cultura política que ha afectado directamente a los jóvenes; tradiciones jurídicas; un profundo paternalismo, etcétera.

Es necesario reformar las leyes y la Constitución, a fin de que exprese fielmente lo que quieren sus jóvenes y lo que desea la sociedad de ellos, con objeto de definir con claridad sobre cuestiones como la mayoría de edad. Así se pueden armonizar las edades y los derechos, estableciendo derechos que no sean regresivos (como la preocupación de la derecha de penalizar antes de los 18 años).

\textsuperscript{36} Eso se desprende de los resultados de la Encuesta Nacional sobre valores y actitudes de la democracia que fundamentan la investigación \textit{Ciudadanos y cultura de la democracia en México} ...

\textsuperscript{37} La frontera final del ser joven y el paso de la adultez hace 50 años en México estaba alrededor de los 20 años, hoy se encuentra seguramente alrededor de los 30 para una proporción importante de ellos, cuestión que se debe a motivaciones personales (querer seguir siendo joven), como del medio ambiente social (crisis económica, falta de empleos, etc.), pero no pueden ser atribuidas a incapacidades asociadas a la edad.

\textsuperscript{38} \textit{Derechos del pueblo mexicano} ..., tom v, p.1112. Comentarios a cargo del multicitado constitucionalista Ignacio Galindo Garfias.
Uno de los ingredientes clave de esas circunstancias lo componen las coyunturas políticas, y la que se visualiza con más oportunidades, en nuestro país, es aquella en la que las élites políticas están buscando ponerse de acuerdo, con lo que se busca transformar las bases del régimen político social de México, y que se ha dado por llamar la Reforma del Estado.

Pero un paso previo, en ese sentido, consiste en contar con el proyecto, es decir, se debe concebir la serie de objetivos que se desean obtener y las características que lo definirán. Para ello, resulta clave saber quiénes son los jóvenes, conocer sus expectativas y demandas, al mismo tiempo que la sociedad debe saber qué quiere de ellos, a fin de que se tiendan puentes. Se debe enriquecer el trabajo de conceptualización sobre ellos, diferenciando a aquellos que aún son adolescentes de los que ya no lo son, y a ambos de los niños.
Hemos visto como priva una gran indefinición del sujeto social y jurídico que encarna el niño, adolescente y joven. Uno de los diversos puntos de desencuentro de la relación juventud y legislación es justamente la indefinición conceptual, jurídica, legal y sociológica que existe entre los términos de niñez, adolescencia y juventud.

Como justamente señala José Antonio Pérez Islas, con relación a la distinción conceptual entre adolescencia y juventud:

[…] la no total claridad que se sigue dando a los conceptos de juventud y adolescencia que en ocasiones se usan como sinónimos y en otra como antónimos. El origen disciplinario desde el cual parten las investigaciones tiene mucho que ver con ello, además de la escasa explicitación y discusión conceptual que muchos estudios no realizan al inicio de los proyectos y que, en ocasiones, queda sólo a nivel de delimitación etaria.99

A ese reto de la sociología, el derecho y la legislación, hemos querido contribuir con este trabajo. 

31